



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, Junio 6 de 2023

Radicado: 05001- 31- 05-**005-2009-00809-03**
Demandantes: GLORIA INÉS JARAMILLO MORENO
Demandados: FIDUAGRARIA, MINISTERIOS DE SALUD Y HACIENDA Y
COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN DE AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN
DE COSTAS

El TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, se constituyó en audiencia pública con el fin de emitir la correspondiente decisión, respecto a la apelación del auto que declaró en firme la liquidación de costas.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiéndose el proyecto presentado por la Magistrada Ponente, **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE**.

1. ANTECEDENTES

Dentro del proceso de referencia se discutió el acceso a la pensión de jubilación a cargo del ex empleador Instituto de Seguros Sociales, liquidada conforme el artículo 98 de la CCT, esto es con el 100% del promedio de los salarios de los últimos 10 años, reconociendo el mayor valor en la prestación desde el 3 de marzo de 2008, junto con los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. De igual forma solicitó el reconocimiento de las cesantías bajo la modalidad de retroactividad, el pago de la prima de servicio y dotación de uniforme.

En sentencia de primera instancia emitida el 31 de octubre de 2014 por el Juzgado 6° Laboral de Descongestión fueron negada las pretensiones aduciendo que la satisfacción de los requisitos para el acceso pensional se cumplieron luego del fenecimiento del vínculo laboral y en cuanto al reajuste de las cesantías definitivas indicó que la modalidad de liquidación fue acordada en la Convención Colectiva de Trabajo, la que ahora no puede desconocer, sin que tuviera derecho a la prima de servicio, ni haya probado el valor del uniforme o datación que ahora reclama (pág 300/323 expediente escaneado N° 1).

Decisión confirmada por esta corporación con sentencia del 28 de abril de 2016, señalando que el derecho pensional no se consolidó en vigencia de la convención colectiva que establecía el derecho pretendido; declaró prescrito el derecho al acceso a las primas de servicio y de navidad (pág 427/439 expediente escaneado N° 1).

Empero, surtido el recurso extraordinario de Casación en providencia SL 5053 - 2021 de radicado 76047 de mayo 24 de 2021 la Sala de Casación Laboral de la CSJ tras manifestar el cambio de posición jurisprudencial respecto al acceso a la pensión convencional para los ex servidores del extinto ISS, esto es aplicable más allá del 31 de octubre de 2004 término inicial de vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, concluyó que *“el extrabajador del ISS que pretenda beneficiarse de la pensión de jubilación extralegal debe acreditar el tiempo de servicio exigido convencionalmente, mientras tuvo la calidad de oficial, con lo cual dejó causado el derecho, pues conforme al nuevo criterio de la Sala, la edad es solo un requisito de exigibilidad”*

Así las cosas, casó la sentencia de esta corporación y en sede de instancia en sentencia del 2 de noviembre de 2021, tasó el monto de la mesada pensional en \$1'387.107 para el 3 de marzo de 2008, disponiendo el pago del del mayor valor en la pensión el que calculó entre aquella data y el 2 de marzo de 2013 por valor de \$99'461.655 más \$48'286.087 como indexación, sin que con posterioridad se

causare diferencia alguna en tanto, asumida la prestación por el SSG a cargo de Colpensiones, el monto pensional es superior al de la pensión convencional subrogada.

Ordenó el pago del beneficio establecido en el artículo 101 de la CCT cuantificado en \$2'512.286. Por último, indicó: “sin costas en segunda instancia, las de primera estarán a cargo de las convocadas” (Pág. 35/57 y 211/225 expediente escaneado N° 2)

Luego, en providencia del 15 de febrero de 2022 fueron liquidadas las costas del trámite, las que totalizaron \$616.000 a cargo de Colpensiones y el Ministerio de Salud y Protección Social en partes iguales y en favor de la demandante (Pág. 267/269), decisión recurrida por la activa, quien señaló que: “No se tuvieron en cuenta los criterios del acuerdo PSA16-10554, se obvió que el monto de las condenas superó los 140 millones de pesos y no se hizo partícipe de la condena a las demás accionadas” (Pág. 277/278 – expediente escaneado N° 2).

Atendiendo esta réplica se modificaron las agencias en derecho en auto del 26 de agosto de 2022 señalándolas en la suma de \$5'909.909.68 que corresponde al 4% de las condenas, gravamen a asumir de forma conjunta por todos los accionados a saber Colpensiones, los Ministerios de Salud y Hacienda y Fiduagraria, con un pago individual de \$1'477.477.42 cada una (Pág.283/286 expediente escaneado N° 2)

Con escrito remitido por medios digitales el 2 de septiembre de 2022 el apoderado de la Nación – Ministerio de Hacienda y crédito Público elevó solicitud de aclaración del auto del 26 de agosto de 2022 a efectos de establecer que la condena emitida por la Sala de Casación Laboral de la CSJ no afecta a esta cartera ministerial, sino que deben ser asumidas por Fiduagraria quien actúa como vocera del patrimonio autónomo de remanentes de la ESE Rafael Uribe Uribe. Se

precisa que en esta petición no contiene recurso alguno contra el monto de las agencias en derecho, pues se concretó en:

En este contexto, le reitero al Despacho mi solicitud de aclarar el Numeral PRIMERO de la parte RESOLUTIVA de la providencia, en el sentido de circunscribir la parte pasiva a FIDUAGRARIA SA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE LA ESE RAFAEL URIBE URIBE, y por contera, excluir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con lo cual se evitarían a futuro eventuales equívocos y desgastes en detrimento de todos los involucrados.

Del señor Juez, con sentimientos de consideración y respeto.

HÉCTOR RAÚL RONSERÍA GUZMÁN
C.C. No. 79.156.068 de Bogotá.
T.P. No. 58.739 del C.S.J.
Correo: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co
Hector.Ronseria@minhacienda.gov.co
Teléfono Móvil: 3112012707

(pág 287/290 expediente escaneado 2)

Petición que fue negada en providencia del 24 de marzo de 2023 indicando que, las entidades accionadas a saber: Colpensiones, Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fiduagraria conforman un litisconsorcio necesario por pasiva y estas en conjunto deben concurrir al pago de las condenas tal como lo indicó la CSJ al gravar en costas a las “convocadas”

En la misma providencia se dispuso la remisión del expediente a esta corporación para surtir el recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de las costas. (pág 317/319 expediente escaneado N° 2)

2. ALEGATOS

Concedido el término establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 las partes no presentaron escrito alguno.

3. CONSIDERACIONES

En los términos del artículo 365 del C.G.P, se grava con costas a la parte que resulte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, las excepciones previas, entre otras.

Ahora bien, sobre la forma en que se fijan las agencias en derecho, dispone el artículo citado que la condena en costas se incluye en la misma actuación que dio lugar a ellas, pero la determinación del monto de las agencias, se reserva para un momento posterior, una vez esté ejecutoriada la decisión; liquidación efectuada por la secretaría y posteriormente, aprobada por el Juez. (Artículo 366 C.G.P)

Acorde con el artículo 365 del C.G.P aplicable en materia laboral, por remisión que hace el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S, ha de entenderse que la liquidación de costas comprende los gastos del proceso y las agencias en derecho, según las tarifas establecidas, que para este caso dada la fecha de inicio del trámite judicial, se regulan en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fijando los rangos para liquidación de agencias en derecho; específicamente para los procesos ordinarios laborales estableció:

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

Única instancia.

Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Primera instancia.

Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia.

Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adicional debe tenerse en cuenta que, para efectos de establecer el valor de las agencias en derecho, el funcionario Judicial ha de moverse dentro de los rangos permitidos en la norma, atendiendo a criterios como la calidad y duración de gestión del apoderado, cuantía de la condena, entre otros aspectos.

Con estas premisas se descende **al caso concreto** y se advierte que la parte demandante acude a un criterio de decisión que no regula el caso analizado en tanto, situado el inicio de la acción judicial el 13 de agosto de 2009 la forma de calcular las agencias en derecho lo es conforme al acuerdo 1887 de 2003, no la norma posterior, Acuerdo PSA16-10554 cuyo artículo 7° de forma diáfana señala que su ámbito de aplicación lo es para aquellos asuntos iniciados a partir del 5 de agosto de 2016.

La anterior claridad bastaría para negar los argumentos de la activa en tanto sustenta sus súplicas en una norma no aplicable.

Sin embargo, verificada la correcta asignación del gravamen se destaca que pese a que el monto que se identificó en el auto del 26 de agosto de 2022 responde a las reglas del acuerdo 1887 de 2003, no recompensa de forma plena las labores realizadas por la activa, cuya gestión ingente y perseverante de agotar todas las instancias posibles, permitió que las pretensiones fueran acogidas por el máximo órgano de la jurisdicción laboral en sentencia SL 5063 de 2021 asignando una condena de \$150'260.028 como suma única.

En adición, para efectos de establecer el porcentaje a asignar, esto es, para moverse dentro del rango permitido, deben tenerse en cuenta aspectos tales como la duración y su dificultad, y en este caso se revela que el trámite tuvo un

devenir prolongado, siendo necesario agotar diferentes instancias presentando peticiones recursos, alegatos e incluso la demanda extraordinaria de casación que tiene una técnica propia que de no seguirse no hubiera permitido el resultado favorable que disfrutará la activa.

Así las cosas, esta corporación incrementará las agencias en derecho en primera instancia al 7%, que corresponde a \$10'518.202. Carga que asumirán las accionadas de forma conjunta y a prorrata.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Sexta de decisión laboral del Tribunal Superior de Medellín, MODIFICA** la providencia recurrida indicando que el monto de las agencias en derecho en primera instancia corresponde al 7%, que corresponde a \$10'518.202. Carga que asumirán las accionadas de forma conjunta y a prorrata.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en estados, y se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen.

Las Magistradas,


LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ